no con el objeto de establecer similitudes, diferencias y tensiones entre cada modelo.

Entre las conclusiones del autor se encuentran que: 1. El criterio utilizado en el SIDH para cuantificar la indemnización es la «equidad» en el caso concreto, por lo que no existen mínimos ni topos. De otro lado, señala que el sistema colombiano sí se ha desarrollado «reglas de la experiencia» para solucionar esta cuestión, aunque el autor señala también los defectos de estas últimas. 2. Que ambos sistemas comparten que el propósito de la indemnización debe ser poner a la víctima en la situación anterior al daño —o a la más próxima posible— conocida como «restitutio in integrum».

En líneas generales, la obra ofrece un análisis profundo sobre los temas de mayor relevancia en el derecho internacional de los derechos humanos, que además se encuentra enriquecido por la aguda crítica a la jurisprudencia de la CorteIDH en temas como los conflictos entre los derechos políticos y la lucha contra la corrupción; las dificultades de la puesta en práctica del control difuso de convencionalidad o el conflicto existente entre los derechos de participación política y su limitación en una sociedad democrática. Este factor dota de gran valor a la obra puesto que lejos de ser meramente descriptiva pone en relieve los desafíos inmediatos a los que se enfrenta a la justicia interamericana.

A pesar de lo dicho, las diferentes contribuciones a la obra redundan en ciertos temas que pudieron haber

sido agrupados en un capítulo introductorio que tratase el funcionamiento general del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos y el control de convencionalidad así como su desarrollo jurisprudencial. Aquella redundancia en los contenidos provoca una dilación innecesaria para los lectores familiarizados con el tema general de la obra; y, de otro lado, priva a los lectores menos especializados de una exposición estructurada y global de estos temas. Por supuesto, ello es una consecuencia natural de una obra colectiva que logró agrupar a veinte autores de las más altas credenciales, y que nos ofrecen, en síntesis, una maravillosa obra que merece ser leída.

Andrés CERVANTES VALAREZO

DOI:

<https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.109.2017.1.16>

DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, Marco: *Justicia o Burocracia*, Civitas, Madrid, 2017. Prólogo de Michele TARUFFO, 287 páginas.

Ciertamente, la actividad diaria de los órganos judiciales se ha visto condicionada de un tiempo a esta parte por reformas tecnológicas, organizativas y procesales que vienen suscitando una amplia polémica. Entre estos cambios, se encuentra la nueva organización de la Oficina Judicial que se inició, en sus aspectos estrictamente organizativos, en virtud de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; norma que supuso la eliminación de la antigua «superior dirección» del Juez o Presidente de los servicios del Juzgado o Tribunal

y la progresiva atribución de funciones de esta naturaleza al Secretario Judicial hasta llegar a conferirle la dirección de la llamada Oficina Judicial mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Estas reformas organizativas se vieron complementadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que conllevó la reforma de las leyes procesales mediante el cambio de competencias procesales (e incluso resolutorias, en algún caso) del Juez o Tribunal al Secretario Judicial o actual Letrado de la Administración de Justicia.

Precisamente, sobre este fenómeno organizativo y procesal se ha pronunciado el autor de la monografía reseñada, en la que, como dice y comparte su prologuista el profesor Michele TARUFFO, su objetivo declarado pasa por «restituir el proceso al juez».

Para desarrollar su tesis, el Sr. DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, tras una introducción, realiza un análisis histórico que parte de lo que significativamente llama «el desmoronamiento del viejo juzgado». En este punto, se da cuenta de la escribanía medieval y de su paso a la secretaría liberal hasta llegar a la disyuntiva legislativa que se planteó con el Gobierno del Sr. AZNAR a la hora de abordar las reformas procesales. Para nuestro autor, la alternativa de la razón estuvo representada por el impulso y aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo el Ministerio de la Sra. MARISCAL DE GANTE. En efecto, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil suponía poner al juez en el centro del proceso desde su inicio, de manera

que se hacían visibles (frente a experiencias anteriores) los principios de oralidad, publicidad, inmediación y concentración. Por el contrario, la opción de la fuerza, según el punto de vista de la obra, supuso, entre otras cosas, la «desjudicialización» parcial del proceso, cuya génesis y antecedentes políticos son analizados críticamente en el libro reseñado (entre ellos, el llamado Pacto de Estado para la reforma de la Justicia negociado por José María MICHAVILLA, por el Partido Popular y por Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, por el Partido Socialista Obrero Español).

Efectuado este examen histórico, el capítulo III se centra en describir las características del nuevo modelo, que, para el autor de la obra, supone el triunfo de la burocracia, lo que constituye, además, el título del referido capítulo. Entre estas notas distintivas, se encuentra, según se refiere en la publicación analizada, la separación del juez del proceso mediante la creación de servicios comunes procesales que resultan totalmente ajenos al juez. En segundo lugar, la regulación resultante se caracteriza por la deslegalización, mediante la aparición de protocolos o instrucciones que marcarán la actividad de la Oficina Judicial. Adicionalmente, y por la importancia que ha tenido en la puesta en marcha de la llamada Oficina Judicial, se estudia la virtualidad que a este respecto representan los actualmente llamados Letrados de la Administración de Justicia, que se encuentran ahora estructurados jerárquicamente bajo la dependencia última del Ministerio de Justicia, cuyo régimen jurídico se expone tam-

bién en términos negativos. Todo ello lleva a Marco de BENITO a identificar una mutación constitucional, esto es, una modificación constitucional llevada a efecto al margen de los procedimientos previstos para ello. Así, se dice gráficamente que «el modelo realmente vigente según las nuevas normas contradice declaraciones y proposiciones formuladas en otras normas de más amplio alcance, que no fueron pensadas para otra realidad distinta y que no han sido derogadas o reformuladas, sino privadas subrepticamente de su significación original por la nueva letra pequeña de la ley». La mutación constitucional se manifiesta en la desintegración orgánica de los tribunales en función del reparto de competencias procesales y en la ruptura de la intermediación judicial mediante la diferenciación entre lo procesal y lo jurisdiccional.

Efectuado este acerado análisis de la legislación vigente en España, se dedica un capítulo, el IV, a las enseñanzas del Derecho comparado. En concreto, se estudia en primer lugar la organización y funcionamiento procesal de los Tribunales franceses (en concreto, la figura del *greffe*), en la que no aparece el desdoblamiento de funciones procesales que denuncia el actor del caso español, mientras que sí que se mantiene la unidad de dirección administrativa del Tribunal. Más complejo es el modelo alemán, ya que, aunque en algunos procedimientos de menor complejidad, la competencia no es de los jueces sino del *Rechtspfleger*, lo cierto es que, en la generalidad de los procedimientos (que son de competencia judicial), el juez está pendiente del pleito del prin-

cipio al fin sin intermediación alguna. Finalmente, el modelo inglés es plenamente judicialista, sin ningún tipo de desdoblamiento. Por lo demás, en los tres países los jueces ostentan, en mayor o menor medida, poderes de dirección, organización y disciplina sobre los funcionarios.

El último de los capítulos del Libro —el V— contiene una propuesta de rectificación del modelo vigente bajo una rúbrica muy gráfica: «aún es posible la cordura». La idea fundamental que se mantiene consiste en la restitución del proceso al juez, a la que se añadiría una reorganización del Cuerpo de Secretarios Judiciales y una liberalización de los servicios de notificaciones y ejecuciones.

Presentados algunos de los contenidos del libro comentado, resta señalar que se trata de una significativa contribución a un debate que, si bien fue intenso al tiempo de la aprobación de la Ley 13/2009, había decaído un tanto en los últimos años, a pesar de que recientes pronunciamientos de los más altos Tribunales puedan incidir acaso en el estado de la cuestión (así, la STC 58/2016, de 17 de marzo, sobre la generalización del recurso de revisión ante el juez de los actos procesales del Letrado de la Administración de Justicia por imperativo constitucional; y la Sentencia de 16 de febrero de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la posición del Secretario Judicial en el proceso y sus consecuencias en cuanto a la falta de legitimación de este funcionario para presentar una cuestión prejudicial). La lectura de la obra, en definitiva, no dejará indiferente a

ningún interesado en el tema, que encontrará datos y puntos de vista sobre un asunto medular de la justicia en España, que exige una permanente atención por parte de la doctrina y de los operadores jurídicos.

Javier OLIVÁN DEL CACHO

DOI:

<https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.109.2017.1.17>

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki:
Derecho Público en Euskal Herria, Editorial IVAP/Lete, Bilbao, 2017, 484 págs.

«Euskal Herria» hace referencia a la nación cultural localizada en un territorio que políticamente forma parte de los Estados español y francés, y dividida en tres formas de organización político-administrativa: la Comunidad Autónoma del País Vasco; la Comunidad Foral de Navarra —comunidades autónomas que constituyen los territorios vascos del Sur o Hegoalde—; y los territorios vascos del Norte o Iparralde (Zube-roa, Baja Navarra y Lapurdi), que a su vez no tienen una estructura administrativa propia y forman parte del Departamento de los Pirineos-Atlánticos y de la Región de Nouvelle-Aquitaine.

Es éste un término al cual se ha prestado poca atención desde la disciplina jurídica. Ello no obstante, en este libro editado también en euskara (*Zuzenbide Publikoa Euskal Herrian*), el Catedrático de la UPV/EHU Iñaki Lasagabaster se aventura a estudiar el Derecho Público en este ámbito territorial, aprovechando para fijarse

en Euskal Herria como hecho político, más allá de hecho cultural, si bien lo hace sin caer en planteamientos utópicos, de ahí que, en consonancia con la falta de reconocimiento de dicho sujeto político, la obra se titule «en Euskal Herria» y no «de Euskal Herria».

En la presentación, el autor manifiesta su propósito de «analizar las categorías jurídicas que desde el Derecho público sirven para estudiar la situación política-administrativa de Euskal Herria». Partiendo de que la identidad política requiere de unas categorías jurídicas que la sustenten o fundamenten, el trabajo reflexiona sobre los componentes jurídicos fundamentales y universales de las naciones sin Estado (como por ejemplo el territorio, la ciudadanía o el derecho de autodeterminación), a la par que intenta contextualizarlos en la realidad jurídica de Euskal Herria a través de la explicación de su historia político-administrativa, de las instituciones políticas vascas, de los derechos históricos, del régimen jurídico del euskara, del sistema de distribución de competencias y las relaciones con el Estado, y de las relaciones entre los diferentes territorios vascos.

El libro se compone de una presentación y de cuatro capítulos que abordan sucesivamente los siguientes temas: *la historia y el derecho en Euskal Herria; las categorías jurídico-políticas fundamentales; el parlamento, el gobierno y el poder judicial; y el régimen jurídico de las competencias de las relaciones entre los diferentes territorios de Euskal Herria*.